

Santiago, tres de enero de dos mil veintidós.

Al escrito folio 89-2022, a todo:

**Primero:** Que el artículo 26 incisos 1º y 2º de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que: “Los servicios públicos serán centralizados o descentralizados”. “Los servicios centralizados actuarán bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente”.

**Segundo:** Que, a su vez el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 1993, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, establece en su artículo 2º lo siguiente: “El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente la defensa judicial de los intereses del Estado”.

Por otra parte el artículo 3 de la referida Ley Orgánica indica que “Las funciones del Consejo de Defensa del Estado son, sin perjuicio de las otras que le señalen las leyes, lo siguiente:

La defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de otros servicios públicos.

Por estas consideraciones la Policía de Investigaciones de Chile no tiene facultades de actuar de manera autónoma en la materia que nos convoca y debe hacerlo necesariamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, de manera que no se hace lugar a su petición de hacerse parte y presentar alegatos en la Segunda Sala de esta Corte

**Vistos:**



Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos cuarto a séptimo, que se eliminan.

**Y se tiene en su lugar y además presente:**

1.- Que, en el presente caso se debe establecer si la recurrida ha cometido un acto u omisión arbitraria o ilegal. Para ello se debe tener en consideración la situación fáctica de la extranjera al ingresar al país.

2.- Que, al respecto debe tenerse a la vista que esta materia se encuentra regulada en el Decreto Ley N° 1094 de 1975 del Ministerio del Interior, en que se establecen las distintas condiciones que pueden tener los extranjeros en el país.

Sin perjuicio de aquello, en el presente caso, no obstante estimarse que formalmente la recurrida habría dado estricto cumplimiento a la legislación aplicable, lo cierto es que de los antecedentes aparece que la amparada manifestó a la autoridad migratoria su deseo de obtener refugio en el país, correspondiendo la tramitación de dicha solicitud, en virtud de lo establecido en la Ley N°20.430, a la Subsecretaria del Ministerio del Interior, quien debe calificar los motivos y exigencias requeridas para su otorgamiento, no siendo la recurrida la llamada a resolver sobre aquello.

3.- Que, conforme lo dicho, el recurso será acogido, solo en cuanto se autorizará el ingreso de la amparada al territorio nacional, para dar curso a su solicitud de refugio, debiendo cumplir previamente las exigencias sanitarias previstas por la autoridad del ramo para ello.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre tramitación de la presentación cautelar, **se revoca** la sentencia apelada de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el ingreso corte 5564-2021 y, en su lugar se declara que **se acoge** el recurso de



amparo deducido en favor de doña Juana López de Rojas, consecuentemente se ordena a la Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, autorizar el ingreso al país de la amparada, previo cumplimiento de la normativa sanitaria dispuesta al efecto.

Comuníquese de inmediato por la vía más expedita, regístrese y devuélvase. Sin perjuicio, ofíciase.

**Rol N° 93.910-2021**



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro Leopoldo Andrés Llanos S., Los Ministros (As) Suplentes Rodrigo Biel M., Raúl Eduardo Mera M. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Pía Verena Tavorari G. Santiago, tres de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a tres de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

